



Asociación Nacional
de Productores e Inversores
de Energías Renovables



“Unidos con energía”

PRESENTACIÓN

ANPIER, Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, es una organización de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, para la representación y defensa de los intereses de productores e inversores de energía fotovoltaica.

ANPIER es la asociación más representativa del sector fotovoltaico español, agrupa a 4.500 socios, personas físicas y jurídicas de todas las Comunidades Autónomas del Estado español.

NORMATIVA RETROACTIVA

El Gobierno Español, primero a través del **RD 436/2004** y después del **RD 661/2007** promovió con la inversión en energías renovables, con el objetivo de implantar y desarrollar estas innovadoras tecnologías, cumplir con los compromisos internacionales para la reducción de emisiones de CO₂ e iniciar el camino hacia un modelo energético sostenible y de futuro en línea con los objetivos marcados por Unión Europea para el horizonte 2020.

Sin embargo, en el año 2010, una vez realizadas las inversiones, el mismo Gobierno que incentivó incondicionalmente aquel modelo de desarrollo energético, cambió radicalmente su política y, a través de dos **normas retroactivas**, **Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010** y **del Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010**, dejó sin margen de viabilidad estas iniciativas particulares y empresariales, que registraron una pérdida media de hasta un 30% de ingresos.

Desde la UE se ha advertido que "La suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector" en el Dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015. El Comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger, que mantiene una amable interlocución con ANPIER, considera esencial que España recupere la confianza de los inversores con un marco legal que no contemple regulaciones retroactivas.

A las disposiciones retroactivas impuestas a los productores españoles de energías renovables se le ha sumado, desde el pasado 28 de diciembre, un **nuevo impuesto de 7% a la generación de energía**, que sumado a las consecuencias de la retroactividad ya soportada, colocan en **situación inviable al 80% de las plantas españolas de energía solar fotovoltaica, todas las que han necesitado financiación**. Un impuesto que las tres grandes empresas que dominan el mercado energético español pueden repercutir, y sin duda lo harán, al consumidor; mientras que los pequeños productores de renovables lo tendrán que asumir de manera directa en sus balances. **A lo que habría que sumar la no actualización de la prima conforme al IPC, tal y como se hacía hasta ahora.**

UN SECTOR MALTRATADO

El sector fotovoltaico está sufriendo, en los últimos años, un evidente hostigamiento por parte de los Gobiernos de España. El mismo, produce una serie de injustificadas vulneraciones de principios constitucionales que entendemos deben de ser defendidos por la figura del Defensor del Pueblo.

Entre esos principios que están siendo vilipendiados reflejamos:

I. Vulneración del principio de tutela judicial efectiva para los pequeños productores.

La extraordinaria indefensión que supone para los productores fotovoltaicos los mecanismos regulatorios que desarrolla el Gobierno de España. Muestra de los mismos son:

- La constante regulación vía Real Decretos Leyes, que coarta el acceso de los perjudicados a los Tribunales de forma directa.
- Los constantes subterfugios para hacer parecer lo que no es. El RD 1565/2010 limitaba la tarifa regulada a 25 años con el único objeto de un mes y medio más tarde, con el RDL 14/2010, ampliarla a 28 para que pareciese una compensación por el drástico recorte que se pretendía.
- La imposibilidad recurrir actos administrativos no definitivos permite a la Administración, al albur de mantener la provisionalidad de determinados actos, que pasen años sin poder tener acceso a los Tribunales.
- Los excesos normativos. El RD 661/2007 ha sido modificado en 9 ocasiones desde su entrada en vigor.
- La aplicación de las nuevas tasas judiciales que destrozan la voluntad del recurrente más pequeño.

II. Vulneración del principio de irretroactividad de las normas desfavorables

Se está convirtiendo en una constante la entrada en vigor de supuestos de clara retroacción normativa contra el ámbito renovable, con el único amparo de calificar dicha retroactividad con el *laxo* término de “impropia”.

Dicho parecer ha sido curiosamente aceptado en alguna ocasión por el Tribunal Supremo, bajo el otro concepto de *rentabilidad razonable*, asumiendo su aceptación sin objetivación alguna más que las manifestaciones interesadas de la Administración.

Lo que es incuestionable es que la absoluta unanimidad de la doctrina jurídica sobre la temeridad de los cambios implantados por los RD 1565/2010 y RDL 14/2010, las constantes llamadas al orden por los Organismos Reguladores de la Comunidad Europea, los criterios a todas luces divergentes del Derecho Comparado, los Recursos de Inconstitucionalidad presentados por tres Comunidades Autónomas hacen pensar que el actuar del Gobierno de España no está siendo el adecuado.

III. Vulneración del principio de seguridad jurídica y confianza legítima.

Como decíamos antes, nueve cambios normativos en tan sólo cuatro años y en el mismo sector, parece evidente que se identifican con cualquier cosa menos con el término “SEGURIDAD”.

Por otro lado, la mala costumbre legislativa de incorporar modificaciones de calado en nuestro sector en normas que nada tienen que ver con nosotros. El ejemplo más gráfico fue la Ley de Economía Sostenible, en la que todo cupo, pero el más cercano lo tiene con el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.

IV. Constante violación del principio de igualdad con el resto de operadores de mercado

Muestras de dicha realidad hay cientos. La más significativa es que el 100% de las instalaciones de producción fotovoltaica que utilizaron financiación ajena, en el ejercicio 2013, con los recortes del anterior Gobierno y la imposición fiscal del actual, estarán en situación de fallido, mientras que las empresas de energía convencional, año tras año, computan unos ingresos extraordinarios, con emolumentos inalcanzables para sus directivos. Sobre esta circunstancia nada debíamos de decir al ser empresas privadas, sin embargo, como está sucediendo en otros sectores como la banca, no podemos olvidar que los extraordinarios estados contables de esas empresas se entienden desde la perspectiva de que el Estado:

- Está manteniendo un sistema de precios marginales a la producción energética, que les supone unos sobrebeneficios en la producción hidráulica y nuclear de más del 100% de sus costes.
- Se perpetúan las concesiones administrativas hidráulicas sin recibir retornos adecuados por parte del erario público.
- Se abonan a determinadas tecnologías cientos de millones de euros por disponibilidades energéticas innecesarias.
- Como ha reconocido últimamente la Audiencia Nacional, dichas empresas han venido cobrando Costes de Transición a una Competencia (que no existe) por importes inimaginables.
- Se les han reconocido extraordinarias posibilidades de generación económica como convertirlos en Comercializadores de Último Recurso *ab initio* con precios mucho más elevados que cualquier otro representante.
- Nuestros Gobernantes acompañan a sus directivos en *viajes de Estado* para facilitar el acceso a su contratación exterior, mientras que se olvidan de los pequeños productores españoles que lo único que pretenden es mantener mínimamente su expectativa de negocio.

Por ello, alguna incidencia se puede pretender al objeto de que **alguien** justifique el trato desigual entre todos los operadores, grandes y pequeños, y por qué el Estado admite la prevalencia económica de aquéllos.

V. Constante violación del derecho comunitario por parte de España.

Se cuentan por docenas las veces que organismos europeos han requerido a España para que cumpla lo establecido en la Directiva 2009/28/CE, haciendo oídos sordos desde la Administración sobre dicha eventualidad.

VI. Vulneración del principio de igualdad entre los españoles.

El artículo 14 de la Constitución Española que consagra la igualdad de todos los españoles ante la Ley; sin embargo, el RDL 14/2010 afecta de manera diferenciada a las plantas de norte y el sur de España, puesto que la rentabilidad de las plantas de la zona sur sufren un porcentaje de merma superior en su rentabilidad, al aplicar dicha

norma una limitación lineal de las horas primadas, sin considerar las características de las diferentes zonas climáticas que técnicamente se establecieron.

PRINCIPIOS INTERNACIONALES QUEBRANTADOS

Legislación retroactiva aplicada por el gobierno español ha violado ciertos principios inherentes al acervo comunitario, el principio de seguridad jurídica y de confianza legítima y el principio de no discriminación, así como el Tratado de la Carta de la Energía, firmado por todos los países miembros de la Unión Europea.

En primer lugar supone una violación flagrante de la Directiva 2009/28/CE por la injusticia que soportan los inversores fotovoltaicos españoles sobre los ciudadanos de la Unión, así como el desprecio de los principios constitucionales y europeos de seguridad jurídica y de confianza legítima.

El Tratado sobre la Carta de la Energía, firmado por todos los países de la Unión Europea, establece la obligación de otorgar un trato justo y equitativo, como se refleja en el artículo 10 del Tratado CE, y se compromete a mantener un marco legal estable, predecible y consistente. Productores e inversores españoles no pueden beneficiarse de los mecanismos de defensa en contra del Tratado constitutivo de la infracción, que se reservan para los no nacionales, por lo que están ejerciendo sus derechos en diferentes tribunales.

En cuanto al principio de seguridad jurídica y de confianza legítima, ambos forman parte del Derecho comunitario y, por lo tanto, son directamente aplicables y vinculantes para los Estados miembros, la aplicación de estos principios se ha desarrollado ampliamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, además, la obligación de respetar el principio de no discriminación, se perfila por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Artículo 18 - y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea Artículo 21 - que establece el principio de no discriminación con respecto a los nacionales de otros Estados miembros.

CONSECUENCIAS

Los principales cambios normativos que han afectado son los siguientes:

1. **Limitaciones en el pago de la tarifa regulada establecida** por el RD 1565/2010, el RDL 14/2010 y la Ley de Economía Sostenible han generado un impacto promedio del 19,8% con respecto al volumen de negocios previsto para 2013 en el marco reglamentario existente en el momento que se realizaron las inversiones. Aunque se trata de los datos medios, el impacto ha sido entre el 30% y el 40% en muchas instalaciones.
2. **7% de impuestos sobre la producción** y la incorporación en el sistema eléctrico, el cual fue establecido por la Ley 15/2012.
3. La remuneración de las tarifas reguladas se actualizará se actualizará referenciado a la inflación subyacente a impuestos constantes, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos RDL 2/2013. Es decir, que no se

actualizan con el IPC General. Este corte se estima en el **2,2% de la facturación en el año 2013** bajo el marco regulatorio inicial, pero el impacto tendrá un crecimiento geométrico en los próximos años.

Impacto medio en 2013 sobre la facturación estimada para el año 2013 en el marco regulador existente para realizar las inversiones:

CAMBIOS REGULATORIOS	IMPACTO % FACTURACIÓN 2013
RD 1565/2010 + RDL 14/2010	19,8
Law 15/2012	5,6
RDL 2/2013	2,2
AGGREGATE	27,6

Los cambios regulatorios introducidos tendrá un impacto asciende un 27,6% del volumen de negocio estimado inicialmente para 2013. Es importante tener en cuenta que muchas inversiones se realizaron con un alto apalancamiento (un 80%), por lo que una reducción del 27,6% en el volumen de ventas para el 2013 provocará que muchas instalaciones tendrán que dejar de pagar sus préstamos en 2013.

Un productor que invirtió sus ahorros de toda una vida (120.000 €) en 2008 para construir una planta típica de PV cuyo coste asciende a 600.000 € (con apalancamiento bancario del 80%, vencimiento del préstamo 2018) ha soportado un flujo de caja negativo de 64.000 € y podría enfrentarse a la perspectiva de las presiones adicionales de efectivo hasta el año 2018, por lo que se ve obligado a entregar las llaves de la instalación fotovoltaica a la banca.

AÑOS	NECESIDAD DE LIQUIDEZ
2008 (Inversión inicial)	120.000€ (600.000€ apalancamiento)
2011	20.000€
2012	20.000€
2013	24.000€
2014	DESCONOCIDOS POR LA VARIACIÓN REGULATORIA
2015	
2016	
2017	
2018	

AFECTADOS: 55.000 FAMILIAS ESPAÑOLAS.

En España más de 55.000 familias que viven de sus instalaciones de energía solar fotovoltaica se encuentran gravemente afectadas, de ellas, un 80%, más de 44.000, sufren tensiones de tesorería que pone en riesgo de quiebra su actividad y con ella su propio patrimonio, pues son instalaciones de pequeñas dimensión, que se pudieron poner en funcionamiento a través de financiación por parte de la Banca que, como es habitual, reclama los pagos bajo amenaza de embargar tanto las instalaciones como los bienes de los propietarios de estas plantas.

Anpier considera que esta situación constituye una Estafa de Estado maquinada con la intención de aproximarse a los objetivos energéticos Europeos de 2020 y a cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión privada de 55.000 familias

españolas, que ahora no obtienen el retorno prometido a través del propio Boletín Oficial del Estado, **una maniobra más escandalosa que la estafa de las preferentes**, puesto que en el caso de las inversiones en fotovoltaica no existía letra pequeña, sino que se han cambiado las condiciones del contrato una vez realizadas las inversiones, y **con la agravante de ser el propio Estado el que las garantizaba**.

EL DÉFICIT DE TARIFA INFLADO QUE SOPORTA EL PUEBLO ESPAÑOL.

España es el país continental de la UE donde sus ciudadanos pagan la factura de la luz más cara y, sin embargo, ha acumulado una “supuesta deuda” con las compañías eléctricas estimada en 30.000 millones de Euros. Anpier estima que un tercio de este déficit de tarifa es virtual, puesto que se ha generado a través de los mecanismos imperfectos que se utilizan en España para fijar el precio de la electricidad y que se encuentran muy alejados de los costes reales de producción, por ello hemos solicitado en repetidas ocasiones al Gobierno español **un ejercicio de transparencia a través de una auditoria de costes del sistema**, sin que hasta el momento se haya tenido ninguna respuesta.

España carece de un modelo energético sostenible y de futuro, cuestión clave para el desarrollo, la competitividad y el bienestar social. Las tres grandes compañías españolas de energía ejercen una **evidente influencia sobre las regulaciones internas y sobre algunos de los responsables de energía del Gobierno**, lo que obstaculiza la definición de un modelo eficiente y sostenible al servicio del ciudadano. Las resistencias a modificar el actual escenario energético español, a pesar de sus alarmantes deficiencias, han llegado al **extremo de la denostación pública de las energía renovables** por parte el oligopolio eléctrico y de algunos altos responsables de la Administración central, que han llegado a cuestionar la viabilidad futura de estas nuevas fuentes y a responsabilizarlas del déficit de tarifa.

EL PUEBLO ESPAÑOL EXIGE UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO.



Ley orgánica 3/1981, de 6 abril, del defensor del pueblo, en su art. 9. 1. Indica que el Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 que dispone que esto deben servir a los intereses generales con objetividad.

Desde Anpier le solicitamos que realice las investigaciones y comprobaciones pertinentes para ayudar al pueblo español a comprender el sistema energético que padece: ineficiente, tóxico, peligroso y caro. Un sistema que sólo beneficia a tres grandes empresas y lastra nuestra salud, nuestras economías familiares, nuestra competitividad y nuestro medioambiente.

Anpier ha recordado reiteradamente al Gobierno la urgencia de diseñar un nuevo modelo energético rentable y responsable, alineado con las preferencias de la

ciudadanía. En este sentido, el pasado 8 de enero de 2013 el **Eurobarómetro** (Flash Eurobarometer 360) publicó los resultados de una consulta realizada a 25.525 ciudadanos de la Unión, en ella se constata que el **70% de los europeos quieren se prioricen las energías renovables en sus respectivos países**, un dato que en el caso de España, supera ampliamente la media europea: **el 81% del pueblos español reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.**

Datos Flash Eurobarometer 360:

	Renewable energy sources	Energy efficiency	Nuclear energy	Carbon dioxide capture and storage (CCS)	Unconventional fossil fuels, such as shale gas	Conventional fossil fuels
 EU27	70%	28%	18%	12%	9%	8%
 ES	81%	27%	16%	10%	7%	6%



ANPIER

Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables

Agustín de Betancourt, 17 – 1ª Planta

28003- Madrid

Teléfono: 91 133 68 77

Fax: 91 598 80 82

www.anpier.org info@anpier.org